



RESUMEN FORO VIRTUAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

TEMA: SALARIOS Y PRESTACIONES

Del 2 al 8 de junio de 2009 se llevó a cabo el foro virtual sobre salarios y prestaciones sociales, un espacio creado con el fin de que los maestros y la comunidad educativa en general establezcan diálogos y discusiones en línea alrededor de la temática salarial y prestacional de los docentes. El foro ofreció a la comunidad interesada en esta temática, la oportunidad de aportar opiniones, dudas y experiencias con la finalidad de ampliar el campo de conocimiento sobre el tema principal de discusión. Su característica principal se refiere a que fue llevado en línea a través del minisitio web lo que permitió una amplia participación sin las limitaciones de tiempo, modo o lugar.

El foro fue dividido en dos hilos de opinión, el primero buscaba que los docentes hicieran sus aportes sobre los temas que les gustaría ver en el micrositio por medio de la pregunta:

“Una vez revisada la información que aparece en la carpeta de salarios y prestaciones sociales del portafolio maestro, ¿qué otros aspectos o temas le gustaría que fueran publicados?”.

El segundo buscaba las opiniones acerca del sistema único de nomina por medio de la pregunta:

“El Ministerio de Educación Nacional ha implementado un sistema único de nómina para garantizar la homogeneidad y oportunidad en el pago de los salarios de los docentes. En su caso particular, ¿qué percepción tiene sobre la liquidación mensual de su salario?”.

CONSIDERACIONES A SALARIO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO:

Uno de los docentes participantes en el foro considera que es imperioso considerar niveles salariales diferentes o bonificaciones sobre el salario para zonas de difícil acceso. Al respecto se aclara que tal situación ya está planteada en virtud de lo señalado en el inciso 6 del Artículo 24 de la Ley 715 del 2001, el cual establece que:

“Los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación, y tiempo, entre otros, de conformidad con el reglamento que para la aplicación de este artículo expida el Gobierno Nacional”.

El anterior artículo ha sido desarrollado por el Decreto 1171 de 2004, el cual se aplica a los docentes y directivos docentes que se financian con cargo al Sistema General de Participaciones y que laboren en establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil acceso.

El Decreto en mención establece una bonificación para los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos estatales cuyas sedes estén ubicadas en áreas de difícil acceso. Esta bonificación será equivalente al 15% del salario que devenguen y no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto. Para su reconocimiento por parte de la entidad territorial, requerirá previa disponibilidad presupuestal.

De acuerdo al Artículo 5 del presente decreto, esta bonificación se pagará proporcionalmente al tiempo laborado durante el año académico en las sedes de los establecimientos educativos estatales, ubicadas en áreas rurales de difícil acceso. Se dejará de causar si el docente es reubicado temporal o definitivamente en otra sede que no reúna las condiciones para el reconocimiento de este beneficio o cuando la respectiva sede del establecimiento pierda el



carácter señalado en el decreto. No tendrá derecho a esta bonificación el docente que se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas.

Para su aplicación, las entidades territoriales deberán dictar el acto administrativo por el cual en cada una de ellas se definen las zonas rurales de difícil acceso, según la normatividad vigente, para su correspondiente cancelación en la nómina oficial.

Es importante que los docentes y directivos docentes soliciten a su entidad territorial el reconocimiento y pago de la bonificación.

Es necesario poner en conocimiento que con fecha 23 de mayo de 2009 se suscribió por parte del Ministerio de Educación Nacional acta final del proceso de concertación del pliego de condiciones presentado por FECODE, en el que uno de los acuerdos fue el de expedir un decreto mediante el cual se definan los criterios para establecer zonas rurales de difícil acceso y se establezcan que con el cumplimiento de uno solo de ellos se acceda a dicha bonificación. El decreto incluirá los elementos de obligatoriedad y periodicidad de la reglamentación por parte de las entidades territoriales certificadas se conformará un comité técnico de participación de la respectiva organización sindical de docentes para que asesore al nominador del ente territorial certificado y de esta manera se determinen dichas zonas.

Hasta tanto sea expedido un nuevo decreto reglamentario, estará vigente el Decreto 1171 de 2004.

ASCENSO EN EL ESCALAFÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CON EL DECRETO 1278 DE 2002:

Fue recurrente que los docentes hicieran aportes respecto del Decreto 1278 de 2002, al respecto se resume lo siguiente:

El escalafón docente es el sistema de clasificación para docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando en su vida laboral, los cuales garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. Este escalafón docente está conformado por tres grados. Los grados se establecen dependiendo de la formación académica de cada docente y por último cada grado estará compuesto por cuatro niveles salariales que son clasificados por las letras (A-B-C y D).

Los docentes que ingresen en carrera gozarán de todos los derechos y garantías que les ofrece este decreto y serán ubicados en el nivel salarial A del correspondiente grado según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado después de tres años de servicio.

Igualmente, se anota que durante el segundo semestre podrán presentar la denominada "evaluación de competencia", la cual es de carácter voluntario para los docentes y directivos docentes que pretendan ascender de grado en el escalafón o cambiar de nivel salarial en un mismo grado. Con base en lo anterior el docente verá reflejado su esfuerzo en el correspondiente aumento salarial.

ESTÍMULOS PARA TRABAJOS CON COMUNIDADES INDÍGENAS:



Uno de los participantes en el foro pregunta sobre los estímulos para los docentes que trabajan con las comunidades indígenas, al respecto es preciso aclarar inicialmente el marco normativo referente a este tema, como el enunciado en la Constitución Política en sus artículos 7, 8, 10 y 168, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, debidamente ratificado por Colombia y aprobado por la Ley 21 de 1991, la cual en sus artículos 6 y 7 establece la obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus Instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Igualmente, dispone que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, de salud y educación de los pueblos interesados, previa su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En desarrollo de los preceptos constitucionales referidos, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), al referirse al servicio educativo de los grupos étnicos define que éste debe estar ligado al ambiente, al proceso de producción social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones, el cual adicionalmente deberá estar orientado por los principios y fines generales de la educación, bajo los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, entre otros.

Conforme a lo anterior el Gobierno Nacional expidió el Decreto 804 de 1995, por medio del cual fija parámetros generales de la Etnoeducación.

En este orden de ideas podemos anotar que tanto los convenios internacionales, la misma constitución, la ley y los decretos reglamentarios, han reconocido al Etnoeducador creando criterios a fin de hacer una discriminación en forma positiva que vaya en beneficio de este grupo docente.

De otra parte, en cumplimiento de Sentencia C-208 de 2007, la Honorable Corte Constitucional determinó la exigencia de expedir un Estatuto Indígena para darles a los indígenas un sistema de carrera específico acorde a su diversidad étnica, cultural, lingüística, entre otros.

La propuesta de estatuto fue presentada por el Ministerio de Educación Nacional a la Comisión Nacional Indígena, la cual está siendo sometida por parte de éstos, a ajustes previos a su decisión de consulta de acuerdo con las normas vigentes.

CESANTIAS E INTERESES SOBRE CESANTIAS:

Muchos de los docentes tienen inquietudes acerca del Ente encargado de pagar las cesantías y los intereses sobre aquellas; al respecto y en aras de aclarar este tema junto con la normatividad aplicable se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El Artículo 15, numeral 3 de la Ley 91 de 1989, señala lo siguiente:

- A. *“Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año”.*

- B. *“Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las*

cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”

A su vez podemos clasificar esta prestación en:

- 1. CESANTIAS DEFINITIVAS:** Adquieren el derecho los docentes vinculados por nombramiento de Entidad Territorial antes del 1 de enero de 1976 asumidos por el proceso de nacionalización y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, esta prestación se liquida con retroactividad. De la misma manera tienen este derecho los docentes nombrados por el Gobierno Nacional y los que se vinculen al Fondo en vigencia de la Ley 91 de 1989, la normatividad aplicables sería la Ley 6 de 1945, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, Ley 91 de 1989 y Ley 244 de 1995.
- 2. CESANTIAS DEFINITIVAS POR FALLECIMIENTO:** Establecido para los beneficiarios del docente que fallece estando en servicio activo, o que habiéndose retirado del servicio no solicitó ni se realizó pago de esta prestación. La normatividad aplicable es la Ley 91 de 1989, Decreto 3135 de 1968, Decreto 1045 de 1978 y Decreto 1848 de 1969.
- 3. CESANTIAS PARCIALES:** Procederán anticipos de cesantía parcial para adquisición de vivienda, liberación de gravamen hipotecario, construcción en lote y reparaciones locativas, a fin de hacer efectiva esta prestación, nos debemos remitir al Acuerdo 34 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que a su vez modifica los acuerdos del 11 de enero de 1995 y No 1 del 26 de junio de 1996 que rige a los docentes afiliados al Fondo.
- 4. INTERÉSES SOBRE CESANTIAS:** Lo tiene todo docente nacional y de cualquier vinculación, con nombramiento posterior al 1 de enero de 1990, con cargo al Situado Fiscal hoy sistema General de Participación. Para los docentes territoriales afiliados al Fondo por convenio los intereses a las cesantías causados con anterioridad a ésta fecha serán responsabilidad del ente territorial. La normatividad aplicable es Ley 91 de 1989, Decreto 196/95 y Decreto 3752 de 2003 Resolución 5600 de 1997 por medio de la cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de los intereses de cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Así mismo, el Decreto 2563 de 1990, por medio del cual se determinan las responsabilidades en el pago de las prestaciones sociales de personal docente nacional y nacionalizado, establece que: *“Las prestaciones sociales del personal docente nacionalizado, que se causen a partir del 30 de diciembre de 1989, así como los correspondientes reajustes y la sustitución de pensiones que se*



reconozcan a partir de dicha fecha, son de responsabilidad de la Nación y serán pagados por intermedio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”

En la actualidad dichos pagos se cancelan a través de la Fiduciaria La Previsora S.A, como administradora de los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Tenga en cuenta los siguientes pasos para el trámite de sus prestaciones:

- a. Las solicitudes se realizarán a través de las secretarías de educación de las Entidades Territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces, y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
- b. Las radicaciones de reconocimiento de derechos, quedarán visibles en forma simultánea, tanto en el Ente territorial y en la Fiduprevisora S.A.
- c. La Entidad Territorial, deberá remitir a la Entidad Fiduciaria, certificación sobre el tiempo de servicio del docente y régimen salarial y prestacional aplicable a cada peticionario.
- d. Las solicitudes se recibirán en estricto orden cronológico, de acuerdo a los formularios que adopte la Entidad Fiduciaria.
- e. La Entidad Territorial deberá, dentro de los 15 días siguientes a la radicación, proyectar el acto administrativo de reconocimiento a la Entidad Fiduciaria.
- f. La Entidad Territorial deberá suscribir el acto administrativo de reconocimiento, previa aprobación del ente fiduciario.
- g. La Entidad Territorial deberá remitir, a la sociedad fiduciaria, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.
- h. La Entidad Territorial deberá notificar al docente del acto administrativo, controlando términos de ejecutoria.
- i. De la misma manera, la Entidad Territorial deberá recepcionar y estudiar recursos, revocatorias, cumplimiento de fallos y otras solicitudes de los docentes, responder a despachos judiciales sobre copias de expedientes de prestaciones de docentes, archivar expedientes de prestaciones de docentes, atender tutelas relacionadas con los trámites de su competencia, atender derechos de petición y solicitud de información en los trámites de su competencia y remitirlos.

SALARIO DE LOS DOCENTES DEL DECRETO - LEY 1278 DE 2002:

El sistema salarial de los docentes regidos por el nuevo estatuto no puede analizarse en forma aislada, es necesario contextualizarlo en su ámbito. El Estatuto de Profesionalización Docente surge de la necesidad de armonizar las relaciones laborales de los nuevos docentes con la nueva forma de dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales a cargo del sistema general de participaciones a nivel nacional y territorial. Así mismo, atender el mandato constitucional de asegurar que la enseñanza esté a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica para que la ley garantice la profesionalización y dignificación de los



maestros. En este sentido, la carrera docente de quienes ingresan al sistema, es un régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión en el sector oficial y se basa en el carácter profesional de los educadores, por tanto va encaminada al mejoramiento de la calidad.

De otra parte cabe destacar para desarrollar este tema, entre otros, los criterios orientadores del nuevo Estatuto de Profesionalización Docente:

- Mejor salario de ingreso a la carrera docente.
- Requisitos para el ingreso.
- Escala salarial y grados de escalafón.
- Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascenso y exclusión del escalafón.

El Escalafón Docente determinado para los nuevos docentes está conformado por tres (3) grados, establecidos con base en la formación académica, grado 1 para normalista superior o tecnólogo en educación; grado 2 licenciado o profesional no licenciado y el grado 3 licenciado o profesional no licenciado con maestría o con doctorado. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D). Así las cosas, se expiden normas para establecer las asignaciones salariales de ingreso, a partir de estudios técnicos cuyo resultado ha permitido que a partir del año 2007 se adopte una escala salarial adecuada a la estructura del escalafón docente.

No obstante, el Ministerio de Educación Nacional continuó con su investigación y profundización en el estudio sobre la base salarial de los nuevos docentes y es así como identifica la brecha existente entre los salarios de los nuevos docentes y los salarios de los profesionales de las ciencias sociales en el mercado laboral.

Para el diseño de los nuevos perfiles salariales se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- A. Nivelación del salario de enganche de los docentes de cada nivel académico con los del mercado.
- B. Uniformizar el crecimiento real del salario durante la carrera docente (la escala salarial existente 2007).
- C. Crear en el grado 2 la “especialización”, que no existía en la escala salarial anterior al 2007.
- D. Contrastar la propuesta resultante con los recursos disponibles del SGP (Sistema General de Participaciones) para diseñar un plan de transición acorde con éstos.

Con excepción de doctores, todos los niveles quedaron por encima de los salarios de enganche del área de educación y cercanos al resto de áreas sociales.

Esta identificación técnica lleva al Gobierno Nacional a generar una estrategia a tres años para equiparar asignaciones y a partir del año 2008 se le aplica a la tabla vigente a 2007 un incremento del 8% promedio en términos reales, esta escala significó para normalistas superiores o tecnólogos en educación y licenciados en educación o profesionales no licenciados en el primer nivel (A), un incremento salarial de 14.11% y; para licenciados o profesionales no licenciados con maestría el 17.40%.

Para la presente vigencia se ha aplicado un incremento promedio en términos reales del 8%, esto es el IPC 2008 equivalente al 7.67% y el porcentaje adicional requerido para cubrir la segunda fase que permita darle alcance a la meta de equiparlos en el 2010 con los profesionales de las ciencias sociales, e incentivando la acreditación de la maestría.



Para mayor información acerca de los Decretos Salariales puede acceder al siguiente Link:

<http://www.mineduccion.gov.co/1621/article-190370.html>

COSTO ACUMULADO DE ASCENSOS EN EL ESCALAFON Y EL CASO ESPECÍFICO DE CHOCO:

En cumplimiento de lo normado en el Artículo 24 de la Ley 715 de 2.001, para financiar el pago de solicitudes de ascensos en el escalafón, a los departamentos, Distritos y Municipios se le asignan y giran recursos de destinación específica para cubrir ascensos a través de los Documentos CONPES 75, 89, 95, 96, 97, 103, 104, 110 y 112.

Con estos recursos las Entidades Territoriales deben financiar las nivelaciones de cada año y de alcanzar los recursos, cubrir el costo retroactivo conforme lo estableció el Decreto 1095 de 2005.

Es posible que algunas Entidades Territoriales registren un déficit de recursos de acuerdo con la última actualización que se recibió por el Ministerio. Su financiación podrá hacerse con los recursos del balance SGP que disponga la entidad y en caso de ser insuficientes podrán solicitarlos al Gobierno Nacional.

El artículo 37 de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 por medio de la cual se aprobó el Plan de Desarrollo de la Nación, el artículo 64 de la Ley 1260 de 2008 y el Artículo 68 del Decreto 4841 de 2008 por la cual se aprueba el presupuesto de la Nación para el 2009 establecen mecanismos para la financiación de la deuda por costos acumulados que deberá certificar el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual se ha definido una metodología que puede ser consultada en el siguiente Link:

<http://www.mineduccion.gov.co/1621/propertyvalue-35425.html>

Como se dijo anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional revisa las liquidaciones presentadas por las Entidades Territoriales y certifica la razonabilidad del monto a reconocer por concepto de ascenso en el escalafón. Una vez el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Descentralización, certifique el monto de la deuda, la revisará con base en la información reportada por la entidad territorial a través de SINEB. Su financiación se hará con cargo a los recursos del balance que dicha entidad debe haber incorporado en su presupuesto 2009 para la cancelación de esta deuda. De resultar insuficientes estos recursos, se reportará la información respectiva a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del mismo Ministerio. De no ser suficientes los recursos del SGP, esta dependencia solicitará al Ministerio de Hacienda los recursos correspondientes.

Para finalizar y recibidos los recursos, la Entidad Territorial expide los actos administrativos de reconocimiento de los costos acumulados, efectúa los descuentos de nómina de ley, paga el valor neto a los docentes y directivos docentes y realiza los pagos a terceros, incluido el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio puesto que los valores que corresponden al FPSM por concepto de los costos acumulados no hacen parte de los recursos sin situación de fondos de la vigencia. El uso de los recursos por parte de la Entidad Territorial se refleja en la información de nómina y financiera que se reporta por SINEB y finaliza enviando los documentos soporte a la Dirección de Descentralización.

De esta manera se da aplicación al artículo 24 de la Ley 715 de 2001.



En el caso específico del Departamento del Choco en la actualidad existen deudas por concepto de retroactivos, primas de navidad y primas de vacaciones, deudas que son exclusivamente del departamento, pues el Gobierno Nacional ha girado en forma oportuna los dineros correspondientes por dichos conceptos; la problemática radica en la misma administración departamental, que ha conllevado a constantes demandas en su contra y que a su vez concluyen en diferentes embargos de cuentas bancarias destinadas en muchos oportunidades a pagar dichas deudas.

BONIFICACION POR RECREACION:

Otro de los participantes del foro se pregunta: ¿por qué a los docentes no se les cancela la bonificación por recreación?

Al respecto debemos aclarar lo siguiente:

La Ley 812 del 2003 establece que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Por su parte el Artículo 38, inciso 3 de la Ley 715 de 2001, preceptúa que a los docentes de los planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones solo se les podrá reconocer el Régimen Prestacional establecido en la ley.

Así mismo la Ley 91 de 1989 determina el régimen de prestaciones sociales que debe aplicarse al personal docente al servicio del Estado, aclarando que en materia de vacaciones, será la que determina el Decreto 1381 de 1997.

Conforme a lo anterior se concluye que los docentes no tienen derecho al pago de la bonificación por recreación por cuanto los mismos tienen en la actualidad un régimen especial por el cual se deben regir.

SALARIOS DE LOS RECTORES DE COLEGIO:

Se elevaron comentarios por parte de algunos docentes acerca de las responsabilidades de los rectores de colegios y la desventaja salarial de los mismos.

Al respecto se puede evidenciar que los decretos salariales del 2009 señalan asignaciones especiales para directivos docentes así: para los rectores de escuela normal superior un 35%, rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación preescolar y los niveles de educación básica y media completos el 30%, rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de educación preescolar y la básica completa el 25%, rector de institución educativa que tenga sólo el nivel de educación media completo el 30%, coordinador de institución educativa el 20%, director de centro educativo rural, el 10%.

Así mismo, se tiene establecido reconocimientos adicionales por jornadas así: rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con menos de 1.000 estudiantes 20%, rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con 1.000 o más estudiantes 25%, rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 1.000 estudiantes 25%, rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con 1.000 o más estudiantes 30%, de la misma manera existen reconocimientos adicionales para el directivo docente que cumpla con



los indicadores de gestión, equivalente a su última asignación básica mensual que devengó al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

Igualmente el director rural que durante el año 2009 cumpla con el componente de permanencia y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación respectiva en el modo que ésta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

De esta manera podemos afirmar en forma categórica que los directivos docentes cuentan con reconocimientos adicionales que incrementan en forma considerable la asignación básica mensual.

PENSIÓN GRACIA:

Son frecuentes las inquietudes sobre los requisitos para acceder a la pensión gracia, al respecto nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

La Ley 114 de 1913 creó esta pensión de jubilación para los maestros de escuelas primarias oficiales con el propósito de corregir de algún modo la desigualdad existente entre los educadores de primaria del sector oficial frente a aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a cargo de la Nación, la precitada norma establece como requisitos específicos que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de veinte años. Esta mesada será equivalente a la mitad del sueldo devengado en los dos últimos años de servicio, o el promedio de los salarios recibidos en caso de que éste hubiese sido variable, siempre y cuando cumplieren con los siguientes requisitos: 1. Haberse conducido con honradez y consagración en los empleos desempeñados; 2. Carecer de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres; 3. No haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, lo cual no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento; 4. Haber observado buena conducta; 5. Si es mujer, estar soltera o viuda; 6. Haber cumplido cincuenta años, o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.

De la misma manera, dicho beneficio se extendió a todos los docentes del sector territorial como una forma de reconocer la importante labor que cumplían. Fue así como se expidió la Ley 116 de 1928, la cual señala en el artículo 6 que *"los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan"*.

Así mismo, la Ley 37 de 1933 en el artículo 3, hizo extensiva la pensión gracia a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria, de esta manera se entiende que tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial territorial podían acceder a la pensión gracia, claro está, siempre y cuando que reunieran los requisitos exigidos por la Ley.

Finalmente, se expidió la ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio", en cuyo artículo 15 se estableció lo siguiente:

"A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

2. Pensiones.



- A. *Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.*
- B. *Para los docentes vinculados a partir del 1o. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional."*

De conformidad con lo enunciado anteriormente la pensión gracia a que alude el artículo 1 de la Ley 114 de 1993 solamente beneficia a los docentes que se hubiesen vinculado al sector público antes del 30 de diciembre de 1980.

RÉGIMENES ESPECIALES:

Uno de los docentes tiene inquietudes acerca de la vigencia de los regímenes especiales en materia pensional, al respecto hacemos referencia al Acto Legislativo 01 de 2005, el cual señala que *"para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones"*.

De la misma manera señala que en materia de pensiones se respetaran los derechos adquiridos; al igual que establece que a partir de la vigencia del acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la república y a lo establecido en los parágrafos del artículo 1.

En el caso específico de los docentes el párrafo transitorio 1 del artículo 1 del acto legislativo establece que *"el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003"*.

Conforme a la normatividad anterior se concluye que los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

TEMA: ASCENSO Y CARRERA



En cuanto a Carrera:

En el foro de salarios se comentó nuevamente el tema de la evaluación de competencias para ascenso o reubicación salarial para los docentes vinculados mediante el régimen del Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278 de 2002-; en la actualidad el Ministerio está en el proceso de firmas del decreto para reglamentar la evaluación de competencias para ascenso o reubicación, esperando se inicie el proceso en el segundo semestre del presente año.

Los criterios para la participación en dicha evaluación son los contenidos en el Decreto 1278 de 2002, es decir que el docente debe contar con tres años de antigüedad en el servicio educativo, haber superado satisfactoriamente dos evaluaciones de desempeño, y estar inscrito en el escalafón.

La evaluación de competencias es la herramienta contemplada en el Decreto 1278 de 2002 – Estatuto Profesional Docente- para que el docente ascienda en el escalafón, pasando de un grado a otro (ascenso) y de un nivel a otro (reubicación):

Ascenso

- Para optar por el ascenso del grado uno (1) al grado dos (2), se requiere que el normalista o tecnólogo en educación nombrado por concurso acredite título de licenciado o profesional no licenciado, por cuanto el grado dos (2) es el grado para licenciados y profesionales no licenciados, con o sin título de especialista.

Así mismo, requiere cumplir con los requisitos generales para participar en la evaluación de competencias (tres años de desarrollo docente en el mismo grado y nivel, estar inscrito en el escalafón y haber superado satisfactoriamente las dos evaluaciones de desempeño de los años inmediatamente anteriores). Una vez presentada la evaluación de competencias, la misma deberá ser superada con un resultado superior al 80%; con lo cual obtendrá el ascenso.

- Para aplicar al ascenso del grado dos (2) al grado tres (3), se requiere que el profesional licenciado o el profesional no licenciado que presta el servicio educativo, además de los requisitos generales (tres años de desarrollo docente en el mismo grado y nivel, estar inscrito en el escalafón y haber superado satisfactoriamente las dos evaluaciones de desempeño de los años inmediatamente anteriores), haya obtenido el título de maestría o de doctorado y supere la evaluación de competencias.

Reubicación:

Igualmente la evaluación de competencias es el medio para que el docente pase de un nivel salarial a otro, dado que el docente continuará en el mismo grado no es necesario que haya logrado títulos académicos adicionales (licenciatura o profesional no licenciado para el normalista o de doctorado y maestría para el licenciado o profesional no licenciado), si cuenta con tres (3) años de desempeño, estar inscrito en el escalafón docente y haber obtenido la evaluación de desempeño satisfactoria, para participar en la evaluación de competencias.



El Decreto 1278 de 2002 dispone que el porcentaje para que la evaluación de competencias se considere superada es de más del 80%, puntaje que aunque es exigente garantiza que los docentes que ascienden sean quienes han logrado las competencias necesarias.

Es importante resaltar el carácter voluntario de la Evaluación de Competencias para ascenso o reubicación en el escalafón docente. Esta es la única de las tres pruebas previstas en el Estatuto de Profesionalización Docente –Decreto Ley 1278 de 2002- en la que es el docente quien decide presentarla (voluntaria); así mismo y dada la naturaleza de la evaluación, que es verificar el grado de competencias logrado por el docente, si el maestro no supera la evaluación seguirá en el cargo que venía desempeñando, en el grado y nivel preexistentes. Como se observa, la evaluación de competencias no afecta la estabilidad del docente.

Otra inquietud es el tiempo previsto entre la realización de las evaluaciones de competencias, por cuanto la norma dispone que ésta se hará como máximo, cada seis años; lo que los maestros interpretan como que ésta se realizará cada seis (6) años.

La evaluación de competencias será realizada cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años entre una y otra (artículo 35 inciso 2 decreto ley 1278 de 2002).

En el aparte transcrito se observa que la ley pone en cabeza de la entidad certificada la decisión de realizar la evaluación de competencias; así mismo dispone un término máximo de seis años de diferencia entre una y otra, lo que significa que la entidad territorial deberá realizar la evaluación dentro de este término de tiempo.